



INFORME DE LA COMISIÓN POLÍTICA

I.- La coyuntura internacional está marcada por las consecuencias sanitarias, sociales, económicas y culturales que está provocando la extensión del COVID por todo el Planeta.

La aceleración de la pandemia de la Covid-19, con su enorme repercusión en Estados Unidos y Brasil, amenaza con extenderse a la India y al continente africano, y las señales de alarma lanzadas por la OMS apuntan a un empeoramiento de la situación, algo que va a entorpecer los flujos comerciales y la tímida recuperación económica que se afronta en Europa, y que puede agravarse con decisiones como la apuntada por Estados Unidos de aumentar los aranceles a productos de cuatro países europeos (Alemania, Francia, España y Gran Bretaña) por el litigio Airbus, disputa que podría derivar en otra guerra comercial.

En los EEUU la revuelta contra la segregación y el racismo ha conseguido importantes movilizaciones, pero no ha podido todavía quebrar el espinazo racista del país, cuya policía sigue cometiendo asesinatos a diario y violando los más elementales derechos de la población negra. Pese a la crisis que se manifiesta en Estados Unidos por el efecto combinado de la pandemia, de la paralización de una parte de la economía y de las protestas antirracistas, el gobierno Trump sigue impulsando una temeraria política exterior que está aumentando las tensiones internacionales. El diálogo nacional con la oposición venezolana, propuesto por Maduro, que apoyan Moscú y Pekín, es rechazado por Washington, y pese a las ocurrencias de Trump sobre hipotéticas reuniones con el presidente venezolano, Estados Unidos mantiene su acoso a Caracas, así su apoyo al gobierno golpista boliviano, mientras aumenta la presión sobre Cuba y Nicaragua.

Estados Unidos ha aprobado nuevas sanciones a China, y censura a medios de comunicación públicos chinos como China Central Television (CCTV), Diario del Pueblo y Global Times, mientras prosigue la guerra comercial. Asia tiene varios escenarios preocupantes: aumenta la tensión en Corea; tres portaaviones norteamericanos (con sus correspondientes dotaciones de aviones de combate, corbetas y fragatas) han sido enviados cerca de los mares costeros chinos, con el propósito de marcar límites a la presencia china; se ha puesto en marcha la venta de nuevo armamento estadounidense a Taiwán; y se ha reactivado la disputa por las islas Diaoyu (Senkaku, para Japón), que existe desde hace años pero que puede entorpecer la mejora de relaciones entre Pekín y Tokio que persigue Xi Jinping, aunque, al mismo tiempo, el gobierno de Abe ha cancelado de forma provisional el despliegue

del escudo antimisiles norteamericano en Japón, probablemente por su elevado coste y por las dificultades económicas que enfrenta el país. Por añadidura, de nuevo surgen protestas nacionalistas y conservadoras en Hong Kong, y Washington ha aprobado la llamada Ley de Política de Derechos Humanos Uygur de 2020, acusando a China de violarlos, mientras el Departamento de Estado contemporiza con el terrorismo nacionalista en la región. Junto a ello, el filipino Duterte recompone su alianza militar con Washington, y el enfrentamiento entre militares chinos e indios en la frontera común, con varias decenas de muertos (cuyo detonante fue la construcción de infraestructuras fuera de la línea de control entre los dos países que inició en abril el ejército indio en el valle del río Galwan), ha movilizado a la extrema derecha india, que cuenta con poderosas organizaciones con millones de miembros e impulsa manifestaciones anti chinas en las ciudades indias, mientras Modi deja hacer, con indisimulada satisfacción, y prosigue su acercamiento a Estados Unidos. Esa crisis con Delhi entra de lleno en la lógica de la construcción del bloque anti chino que persigue Trump.

Las diferencias entre Estados Unidos y Rusia no disminuyen. Aunque Washington y Moscú negocian el intercambio del espía norteamericano Paul Whelan, condenado a prisión en Rusia en 2018, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko -que lleva diez años en una cárcel norteamericana después de que fuera detenido en Libia en 2010 y extraditado ilegalmente a Estados Unidos, acusado de narcotráfico- y por el también ruso Víctor Bou, detenido en Thailandia por el espionaje norteamericano y trasladado a Estados Unidos acusado de terrorismo, el enfrentamiento entre Moscú y Washington sobre la expansión militar de la OTAN en el Este de Europa y en el Mar Negro, y sobre el futuro del desarme nuclear y los tratados internacionales, no presenta signos de mejoría. La cita celebrada el 22 de junio en Viena entre delegaciones de ambos países para examinar el estado del Tratado START III es un buen signo, pero Trump mantiene su rechazo a extender la vigencia del acuerdo, que expira en febrero de 2021. Estados Unidos insiste en la incorporación de Pekín a esas conversaciones, aunque China no dispone de ese tipo de armas nucleares (la tríada) y su arsenal es notablemente menor que los de Washington y Moscú: es más pequeño que el francés y similar al británico. Sumados sus arsenales atómicos, Estados Unidos y Rusia poseen el noventa por ciento del total mundial.

Junto a esa agresividad, un inquietante signo para Estados Unidos: su deuda, la mayor del planeta, alcanzó en junio los veintiséis billones de dólares, y aumenta a un ritmo endiablado: pasó en treinta y cinco días de los 25 billones del pasado 5 de mayo a los 26 billones de junio, y dos meses después de superar los 24 billones el 7 de abril. Cuando Trump llegó a la presidencia la deuda del gobierno federal era de veinte billones: en tres años y medio ha acumulado seis billones más. Esa deuda es insostenible, y el mundo lo sabe: los Estados Unidos viven sentados sobre un barril de pólvora.

En Oriente Medio la guerra impuesta a Siria ha reducido su economía a una sexta parte del volumen de preguerra, y el desempleo y la pobreza causada por la destrucción alcanza a tres cuartas partes de la población. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue comerciando con el petróleo sirio, gracias a su presencia ilegal en el norte del país. La entrada en vigor de la llamada Ley de

Protección civil César (por el seudónimo otorgado a un desertor militar sirio que colabora con Washington) aprobada por el Congreso estadounidense contra dirigentes sirios, es una nueva vuelta de tuerca para ahogar la economía siria, y no excluye alcanzar a ciudadanos de otros países que colaboren con Siria. En virtud de la aplicación extraterritorial por Estados Unidos de sanciones a otros países, que Rusia denunció en el Consejo de Seguridad su radical nulidad, gesto valioso que, sin embargo, no impide la ejecución de la Ley César, Trump quiere impedir la reconstrucción de Siria (torpedeando los proyectos donde participan Rusia, China, Irán, Emiratos Árabes Unidos y otros países, como Jordania), y esa ley no esconde su pretensión de derribar al gobierno de Damasco.

Es también de la máxima relevancia, la anunciada anexión por Israel, en julio, de la tercera parte de Cisjordania y de todo el valle del Jordán. Esa ilegalidad manifiesta y patente violación del derecho internacional debe ser denunciada, como ha hecho la ONU, y nos obliga a trabajar para conseguir que la Unión Europea y al gobierno de España condenen la anexión y acuerden sanciones contra Tel-Aviv en caso de llevarse a cabo. El PCE y las fuerzas progresistas y antiimperialistas debemos ponemos en marcha una campaña de denuncia de la anexión y de solidaridad con Palestina.

II.- En Europa, el Plan de reconstrucción tiene una cita decisiva el 17 de julio, cuando se reunirán en Bruselas los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea. El proyecto de 750.000 millones de euros presentado por la Comisión es impugnado por Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria, cuyos gobiernos pretenden aumentar la parte que se destine a créditos a los distintos países afectados y reducir los subsidios.

Aunque Alemania contemporiza y ha hecho algunos gestos hacia los países del sur de Europa, esos gobiernos han planteado también disminuir su propia aportación al presupuesto de la Unión, limitar la duración de las ayudas e imponer condiciones de reforma económica a los países que las reciban, algo que, en su jerga neoliberal, significa forzar a privatizaciones de empresas, reducir el peso del sector público, nuevos recortes de pensiones y empeoramiento de condiciones de trabajo.

La propuesta que debe presentar Charles Michel, presidente del Consejo, se antoja que será difícilmente satisfactoria para los países que más están acusando los efectos de la pandemia, como España. Además, la regla de la unanimidad complica sobremanera la negociación. El grupo nórdico quiere reducir la cantidad de 750.000 millones y, al margen de cuál sea el presupuesto final, el retraso en la aprobación del plan definitivo impondrá una importante demora en la recepción de créditos y subsidios, lo que dificultará de manera significativa la recuperación económica.

Si ya era inaceptable la propuesta de la Comisión -con la que España recibirá 154.000 millones, entre préstamos y transferencias-, que sepultaba el plan de dos billones de euros que aprobó el Parlamento Europeo, hay que insistir ahora en que el plan final que apruebe la Unión Europea no vaya acompañado de la exigencia de reformas antipopulares, ni suponga el predominio de ayudas a las empresas, ni fuerce a inconcretas referencias a la "modernización

económica” y a “inversiones” que, en la práctica, suelen ocultar trasvase de recursos y ventajas fiscales y tributarias para grandes empresas y banca privada.

La pugna de los países del Sur de Europa por la financiación de la reconstrucción se centra por tanto en conseguir la aprobación por el Consejo de subvenciones o transferencias económicas en lugar de préstamos que deban ser devueltos y se condicionen al mantenimiento de políticas de recortes y neoliberales. El PCE debe trabajar en este contexto para intentar poner en marcha por primera vez en la UE una herramienta de política fiscal que nos aleje de las políticas monetarias, para poder mutualizar la deuda en que incurra cada país, o la Unión Europea como tal, surgida a consecuencia de la concesión de préstamos post covid.

Por ello nuestra posición es trabajar para conseguir la aprobación por el Consejo Europeo de un plan ambicioso, similar en su monto económico al sugerido por el Parlamento, y que sea destinado en su mayor parte a la protección de desempleados, al mantenimiento de salarios y puestos de trabajo, al fortalecimiento de la sanidad y la enseñanza públicas y las pensiones, y a una renovación de la estructura productiva que ponga énfasis en una economía que no destruya el medio ambiente y asegure el bienestar de la población y no los negocios privados de los grandes empresarios. En la coyuntura de la pandemia, el PCE debe trabajar para conseguir poner en marcha también en Europa movilizaciones obreras y ciudadanas que ayuden a que las instituciones europeas atiendan las necesidades populares.

Al mismo tiempo planteamos la posibilidad de aprovechar que la crisis ha puesto de manifiesto todas las contradicciones, insuficiencias y debilidades de la UE para acumular fuerzas en la defensa de un proyecto de un nuevo modelo de integración más solidario, horizontal, democrático y respetuoso con las soberanías populares. A estos objetivos dedicamos nuestra participación en el GUE, PIE y Foro Europeo.

Finalmente, mencionamos que los resultados de la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia muestran que donde las fuerzas de izquierda y ecologistas se han unido para poner la solidaridad social y las políticas medioambientales en el corazón de sus ciudades, han ganado. En todas estas ciudades, el Partido Comunista Francés ha sido actor de estas victorias y participará en estas nuevas mayorías, en Marsella, Lyon, Burdeos, Estrasburgo, Poitiers, Nancy.

Con estos 233 alcaldes elegidos ayer, el PCF sigue siendo una fuerza clave para la clase trabajadora en Francia. Serán puntos de apoyo para la defensa del clima con acceso a transportes públicos para todos, para el acceso a viviendas de calidad, para el control del precio de los alquileres, para el acceso a la sanidad. Estarán al servicio de la defensa del empleo, el desarrollo de los servicios públicos, y la promoción del acceso a la cultura y los deportes para todas y todos. Felicitamos a nuestros camaradas del PCF por estos resultados electorales.

III.- La crisis de Régimen ha implicado la ruptura del pacto constitucional de construcción del estado social, roto por los poderes económicos dominantes por el PP, pero también con la colaboración durante muchos años del PSOE.

Conservar las libertades y derechos conquistados exige un nuevo proceso de cambio democrático, ojalá que hasta activar el poder constituyente del pueblo como forma más eficaz de blindar derechos y libertades. En este momento nuestra presencia en el gobierno de España es un elemento determinante para mantener abierta la crisis de régimen, máxime considerando las dificultades que nos encontramos a la hora de organizar amplias movilizaciones. No dudemos que nuestra salida del gobierno en estos momentos facilitaría enormemente un pacto de estado entre las fuerzas neoliberales y conservadoras para garantizar una salida a la crisis de régimen al menos en clave reformista si no directamente conservadora.

Superada la etapa de movilización popular y cuestionamiento de las políticas dominantes que habían significado el 15M, el descenso de la capacidad de movilización social por agotamiento ha permitido el inicio de un periodo de recuperación del régimen, con una fachada mas autoritaria, entregado a un discurso que justifica reducir el ya débil Estado social, es decir debilitar los derechos sociales y recortar sustancialmente las libertades.

La señal inequívoca de esta crisis en el régimen está en la autonomización de los aparatos del Estado y el surgimiento en ellos de sectores que toman la iniciativa y se preparan para un combate frontal contra los intereses populares.

La oposición que combate el gobierno de coalición no está únicamente en el Parlamento o en el poder económico, también en distintos aparatos del Estado no suficientemente democratizados a la muerte del dictador. Los grandes medios de comunicación, los poderes económicos y empresariales, los grandes grupos financieros ejercen una oposición de este tipo y usan, sin ningún tipo de precaución, a las tres derechas como instrumento de acoso y presión.

La capacidad de movilización de la izquierda social y política y los sindicatos, en un nuevo contexto internacional cada vez más agresivo contra el progreso de los pueblos, debe incrementarse para dificultar la estrategia de la oligarquía de doblegar al gobierno de coalición e intentar imponer políticas de ajuste pactadas con las instituciones europeas. Ello requiere la ruptura del gobierno y la salida de las y los ministros de Unidos Podemos, objetivo que ha sido una constante desde la conformación del gobierno de coalición y que tras el fracaso de los intentos de desestabilización durante el Estado de Alarma ahora reconvierte su estrategia con una brutal campaña de deslegitimación y desprestigio al máximo referente público de Unidas Podemos en el espacio político y en el Consejo de Ministros. Una deslegitimación planificada cuya pieza no es la persona situada en la diana sino el proyecto político que ésta representa.

Todo ello en el contexto de la pugna por decidir cuáles serán las políticas orientadoras de la denominada "reconstrucción económica y social del país", un debate que se pretende circunscribir al trabajo en una comisión

parlamentaria, pero que necesariamente debemos llevar a un terreno de debate y confrontación de ideas más amplio que implique el más extenso debate social posible en coordinación con el incremento de una movilización social que debe ser organizada. Es la única opción que las fuerzas de la izquierda tenemos para alterar a nuestro favor la actual correlación de fuerzas, limitada por una limitada representación parlamentaria de Unidas Podemos.

Para el PCE es estratégico que en el actual contexto político y social se revitalice la capacidad de movilización e intervención política del movimiento obrero organizado, que no puede quedar limitado a su intervención en las mesas de trabajo del dialogo social y las reuniones periódicas en las instituciones. Las movilizaciones impulsadas por los sindicatos hace una semana, exigiendo unas políticas de reconstrucción al servicio de la clase trabajadora, fueron un importante inicio para mostrar la voluntad de movilización en esta "nueva normalidad", pero pusieron en evidencia la necesidad de organizar, reforzar y multiplicar estas movilizaciones -también por nosotros, en coordinación y complicidad con los sindicatos-, objetivo que es prioritario para el PCE. El PCE debe trabajar para articular y reforzar la vinculación entre los sindicatos y los movimientos sociales, en especial con aquellos movimientos y expresiones de luchas sociales vinculadas al mundo laboral. No podemos perder de vista que muy probablemente la actual confrontación entorno a la mesa de "dialogo social" entre el gobierno, la patronal y los sindicatos dará lugar a movilizaciones sindicales el próximo otoño, que deben ser exitosas para facilitar la puesta en marcha con la mayor rapidez posible de las medidas para dejar sin efecto la reforma laboral acordada por anteriores gobiernos. No basta con aprobar medidas programáticas si no tenemos la fuerza suficiente para ponerlas en práctica.

Destacamos también la importancia de preservar la fortaleza y unidad de movimientos sociales que han sido determinantes para hacer avanzar los intereses de la clase obrera y las luchas populares en los últimos años, como ha sido el surgimiento de un amplio movimiento feminista con una destacada visión de clase. Ante los complejos debates que se están produciendo en estos días, el PCE debe mantener una estrategia de preservación de la unidad y máxima cohesión de dicho movimiento, jugando un papel destacado en la construcción de alternativas de clase en los debates, trabajando por reducir la crispación y confrontación y defendiendo la unidad del movimiento feminista en tomo a las propuestas acordadas en el XX Congreso del PCE.

Venimos defendiendo desde que empezó el debate sobre la necesaria reconstrucción económica y social de España, que no ha sido estrictamente el COVID lo que ha provocado esta inmensa crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria. El sistema capitalista en el que vivimos, en la actual fase de desregulación y reducción del Estado en aplicación de las políticas ultra neoliberales, es lo que nos ha provocado el grave problema de seguridad humana que ha imposibilitado resistir ante una intensa disminución de la actividad económica de poco más de dos meses de duración. El sistema tenía los pies de barro y no fue capaz de aguantar una crisis grave e imprevista.

Por ello, el debate sobre las bases de la reconstrucción económica y social es estratégico y la confrontación no ha hecho más que empezar.

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados ha aprobado los borradores que cada uno de los cuatro Grupos de Trabajo trabajarán como ponencias y, tras el correspondiente trámite de enmiendas, se llevarán al debate en el plenario del Congreso en la segunda quincena de julio.

Tras acabar el primer semestre de la experiencia del cogobierno en nuestro país, la priorización de la gestión de la pandemia y su grave impacto en España y en el mundo ha marcado nuestro trabajo político. Los ambiciosos retos políticos con los que Unidas Podemos entraba en el Gobierno al inicio de la legislatura, se ha convertido en retos urgentes y necesarios de alcanzar con rapidez a medida que evolucionaba la crisis del COVID-19.

Desde el primer momento nuestro objetivo ha sido que en esta nueva crisis el Gobierno de España no le diera la espalda a nuestro pueblo, que no se repitieran los errores que marcaron la gestión de la crisis a partir de 2008, en la que se rescataron a los bancos y dejaron caer a las familias trabajadoras.

En los últimos meses Unidas Podemos, con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas que forman parte de esta convergencia política, hemos impulsado numerosas medidas para levantar el denominado "Escudo Social" para que nadie se quedara atrás en esta crisis. La aprobación de medidas para la protección de los trabajadores evitando los despidos a través de ERTes y la intensificación de las inspecciones de trabajo, el impulso de ayudas directas e indirectas a pequeños y medianos empresarios, autónomos y empleadas de hogar, la prohibición de cortes de suministros básicos, despidos objetivos por el COVID, la suspensión de desahucios o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital son solo algunos de los ejemplos de políticas –podemos afirmarlo con rotundidad- que sin la presencia de Unidas Podemos en este gobierno sin duda que no se habrían aprobado.

Esta crisis también ha puesto a España y, sobre todo, a sus servicios públicos, delante de un espejo. Décadas de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos y de transferencia de capital público al sector financiero han tenido consecuencias dramáticas para la población. No podremos evitar la repetición de pandemias globales, pero sí debemos preparar a nuestro país, sus instituciones y su economía, para que no vuelvan a repetirse situaciones como las que hemos vivido. Para eso necesitamos un debate sobre la reconstrucción de nuestro país, que no ha hecho más que empezar.

La convocatoria de una Comisión de Reconstrucción en el Congreso es un primer paso para la consecución del objetivo anterior, pero no puede ni debe ser el único, porque tal y como hemos venido repitiendo en diversos documentos del PCE y de IU no se podía dejar exclusivamente en el ámbito institucional la elaboración del Plan de Reconstrucción que necesita nuestro país.

En esta Comisión Parlamentaria, los borradores de las conclusiones elaboradas con las aportaciones recibidas en el Congreso durante el último mes pasaran ahora al debate parlamentario.

Estos borradores presentados no contienen todas las conclusiones que nos hubiera gustado que figuraran en las ponencias aprobadas para su debate. No se contemplan medidas que en nuestra opinión son necesarias para que la gestión de la crisis actual y de la que viene no se cargue sobre las espaldas de las familias trabajadoras de nuestro país. Hemos defendido públicamente que es necesario implementar medidas audaces en materia industrial, económica y fiscal para, garantizarla creación de riqueza y su justa redistribución, de forma que avancemos en cambiar las bases de nuestro modelo económico.

Hemos insistido en que la activación de la movilización social es imprescindible para alterar a nuestro favor la correlación de fuerzas política que permita que las más importantes de nuestras propuestas para la reconstrucción queden definitivamente aprobadas entre las conclusiones aceptadas por el gobierno de España. Por ello ya hemos mencionado la importancia a la par que la debilidad constatada en las movilizaciones sindicales del pasado fin de semana en toda España. E igualmente es momento de valorar la escasa puesta en marcha de la campaña por la reconstrucción aprobada desde el espacio de Unidas Podemos, donde por ahora solamente se han podido realizar dos encuentros con colectivos sociales –de sanidad y de cuidados respectivamente- pero solo algunas organizaciones del PCE han puesto en marcha la campaña a fecha de hoy y desde luego pocas organizaciones territoriales de IU. Reiteramos los acuerdos adoptados desde la última reunión del Comité Central y las sucesivas reuniones de Comisión Política de organizar la campaña política y social de movilización en torno a nuestras propuestas sobre la reconstrucción tras la emergencia, para que estas propuestas pueden llegar a ser hegemónicas. EL PCE no tiene que esperar a que ninguna de las organizaciones del espacio Unidas Podemos nos contacte o proponga organizar estas actividades, puesto que esta campaña surge de nuestros órganos y desde el primer momento hemos decidido tener un papel de organizadores de la misma. El PCE debe potenciar y organizar el trabajo conjunto entre las distintas asambleas y organizaciones de base del espacio Unidas Podemos en todo momento y respecto a cualquier actividad política, más aun para impulsar esta campaña.

Si somos conscientes de que la disputa sobre la reconstrucción no ha acabado, sino que no ha hecho más que empezar, concluimos necesariamente que necesitamos impulsar un proceso de acción política y social para avanzar hasta conseguir la victoria del bloque democrático -que se articuló en torno a la investidura- sobre el bloque autoritario que solo busca desestabilizar al Gobierno.

En ese momento político, es positivo llegar al más amplio consenso del mayor número posible de fuerzas políticas de nuestro país en torno a las propuestas defendidas por el Gobierno –en especial sobre los contenidos del acuerdo programático de gobierno-, reduciendo así el ambiente de crispación que han creado la derecha y la extrema derecha. Estando en pleno proceso electoral en Galicia y Euskadi y una vez retirado VOX de todo lo relacionado con el

proceso de Reconstrucción que se sigue en el Congreso, el Partido Popular intentará alcanzar algún acuerdo parcial, probablemente en lo relacionado con el Sistema Nacional de salud y las relaciones con la Unión Europea. Ese acuerdo parcial y coyuntural no puede ser la excusa para una salida en falso que pretenda obviar la situación de abierta confrontación política de la derecha con el gobierno de coalición. Para evitar esa posibilidad la cuestión clave es que este debate no se resuelva en términos exclusivamente institucionales, sino que requiere de la movilización social y política para generar propuestas desde el movimiento social y sindical que asumamos como nuestros objetivos de reconstrucción. Por ello, debemos seguir reforzando los siguientes ejes de trabajo para los próximos meses:

1.- Para nosotros el pacto programático del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es irrenunciable y sigue vigente en todos sus términos, no quedando sin efecto por un hipotético acuerdo de reconstrucción que no contemple objetivos incluido en el anterior acuerdo programático.

2.- En las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción deberá constar el fortalecimiento de los servicios públicos, la extensión de los derechos sociales y laborales y la puesta en marcha de una fiscalidad progresiva equiparable al contexto europeo.

3.- El proceso de debate de las próximas semanas en torno a las propuestas para la reconstrucción es fundamental para consolidar el bloque democrático que hizo posible el actual Gobierno de coalición y debe permitir aprobar próximamente unos PG del Estado. En este bloque no tienen cabida las expresiones políticas de la ultraderecha ni las de la derecha y sus aliados. Nuestra tarea ahora es utilizar el debate parlamentario sobre las conclusiones del proceso de Reconstrucción como alternativa a un posible "pacto de Estado" en el que Partido Popular y Ciudadanos estarían más cómodos.

4.- Es fundamental conjugar el trabajo político con la movilización social y política, ya que solo es posible aumentar el peso político de nuestros 35 diputados con una fuerza sostenida de movilización en la calle, empujando para la consecución de aquellos acuerdos que beneficien a la mayoría de gente trabajadora de nuestro país. Corresponde que desde el espacio de Unidas Podemos se trabaje intensamente por incrementar la movilización social y política en torno a la campaña sobre la reconstrucción iniciada hace varias semanas.

5.- Nuestro objetivo es garantizar que el máximo de las siguientes propuestas, que creemos que son imprescindibles para reconstruir el país, se sitúen como prioritarias en la agenda de trabajo gubernamental que surja de la finalización del debate sobre la reconstrucción: recuperar la soberanía productiva y energética para una reindustrialización verde y sostenible; fortalecer el sector público para que nadie se quede atrás en esta crisis; subordinar toda la riqueza del país al interés general; todos los recursos del país al servicio de la reconstrucción; todos los derechos para todas, defender la universalidad de los derechos humanos; un sistema nacional público de cuidados profesionalizado; no a la UE del capital y las oligarquías nacionales.

IV.- En la actual coyuntura política, es trascendental que el PCE, IU y todo el espacio de Unidas Podemos pueda rentabilizar los avances sociales y laborales que este gobierno vaya realizando, en especial en comparación con las medidas adoptadas por el gobierno socialista primero y el gobierno del Partido Popular después, en la crisis del 2008 y años sucesivos.

Sorprendentemente, no siempre esto es así y en muchas ocasiones las conquistas, éxitos y avances que hemos impulsado se atribuyen al PSOE, como se refleja por ejemplo en las encuestas respecto a la mayoría de las medidas de protección a la clase trabajadora (incluidas personas consideradas falsas autónomas) adoptadas por el Ministerio de Trabajo durante el Estado de Alarma.

Pero igualmente y a sensu contrario, también es necesario que sepamos hacer ver nuestras derrotas y mostrar que eludir las depende el apoyo popular que obtengan nuestras propuestas, sin ocultar que las derrotas tienen costes, tanto respecto al desarrollo de políticas con efectos sociales pernicioso y, por otra, con el posible aislamiento político, ideológico e institucional que pueden suponernos.

Pero mostrar nuestras limitaciones sin ocultamientos también permite el reforzamiento de nuestro perfil autónomo y diferenciado del PSOE. Cada derrota parcial debe ser explicada y desde ella tenemos que ser capaces de lanzar nuevas propuestas políticas de forma constructiva.

Hasta conseguir la aprobación del Ingreso Mínimo Vital hemos tenido que sufrir distintas derrotas parciales, que han retrasado la aprobación de este derecho y en parte lo han limitado respecto a nuestra propuesta inicial. No habríamos conseguido alcanzar nuestros objetivos sin dar la batalla cultural en el terreno de las ideas en la sociedad hasta conseguir un apoyo superior al 80% de las personas que viven en España.

De esta forma somos conscientes de que para poner en marcha todas las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno de coalición será necesario en muchos casos confrontar internamente hasta conseguir la puesta en marcha de la medida, como por ejemplo estamos haciendo estos días respecto a la propuesta del Impuesto a las grandes fortunas para financiar el escudo social. Seamos conscientes de esta situación y entremos inteligentemente en la pelea cuando sea necesario, siempre con un discurso en positivo de conquista de nuevas medidas de protección a nuestro pueblo, sin que cunda la decepción y sin debilitarnos, no ya el Gobierno de coalición, sino al propio "espacio progresista".

Para continuar desarrollando este trabajo es necesario que el Partido, sus organizaciones, su militancia, sea capaz de estar a la altura del momento político, siendo capaces de ser un Partido de movilización, de propuesta y de influencia en la aplicación de medidas de gobierno para conseguir el mejor resultado para la clase obrera, las capas populares y el futuro del país.

V.- En medio de la campaña electoral de las Elecciones Autonómicas en Euskadi y Galicia, mostramos nuestro apoyo a las candidaturas del espacio

Unidas Podemos en estos territorios y nos ponemos a disposición de las organizaciones del PCE y de IU para contribuir al éxito de la campaña electoral. El resultado de estos procesos electorales autonómicos será debidamente analizado una vez conozcamos los resultados, siendo conscientes de la anómala coyuntura política en que se desarrollan y las distintas situaciones políticas en cada uno de los dos territorios donde se celebran, procesos que en ambos casos se celebran en territorios con importante peso de los nacionalismos.

Madrid, 3 de julio de 2020